

Movimientos sociales y poder político: la politicidad de la acción colectiva como eje de debate entre dirigentes sociales de la FTV/PTA de Argentina

CECILIA CROSS

<ccross@ceil-conicet.gob.ar>

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales

CONICET

Argentina

[Resumen] Los conceptos «movimiento social» y «partido político» definen modos específicos de inserción en la cosa pública mutuamente prescindentes. Esta caracterización, formulada en el contexto de democracias occidentales, impide comprender la complejidad de los procesos de movilización social que se han expresado en América Latina desde la década de 1980. Por ello urge repensar estas conceptualizaciones a partir de investigaciones empíricamente fundadas que den cuenta de estos procesos. Con este fin, aquí se analizan los debates acerca de la inserción en el campo político que tuvieron lugar entre líderes de un movimiento social piquetero, la FTV, frente a dos situaciones concretas: la «aceptación» de programas sociales en 2000 y la conformación de un partido, el PTA, creado en 2003 para apoyar al presidente.

[Palabras clave] Movimientos sociales, poder político, partidos políticos, movimientos piqueteros, Estado, Argentina.

[Title] Social Movements & political power: The politicity of collective action as a debate among social leaders of Argentinean FTV/PTA

[Abstract] Social movement and political party define specific models of political participation, which are usually tackled as apathetic one to the other. This characterization, formulated in the frame of western democracies, does not allow comprehending the social mobilization processes that took place in Latin America along the last 25 years. In that context urges the construction of a regional approach built on the results of empirically based researches. With that purpose we analyze here the debates about social movement possibilities and limits sustained by the leaders of FTV, a picketing movement, in two different contexts: when they have the chance to accept state subsidies and when some of them decided to create a political party, the PTA, to support the president.

[Keyword] Social Movements, Political Power, Political Parties, Picketing Movements, State, Argentina.

CROSS, Cecilia. «Movimientos sociales y poder político: la politicidad de la acción colectiva como eje de debate entre dirigentes sociales de la FTV/PTA de Argentina». En: ELECCIONES, 2012, enero-diciembre, v. 11, n.º 12, pp. 71-98.

[Recibido] 06/06/12 & [Aceptado] 1/10/12

INTRODUCCIÓN

Por definición, los movimientos sociales suelen pensarse como indiferentes o ajenos respecto de los procesos electorales. Y estos supuestos, forjados en ámbitos académicos, merced a la doble hermenéutica (GIDDENS 1982 [1967]) que caracteriza a las ciencias sociales, son sostenidos con vehemencia también entre activistas, formadores/as de opinión y funcionarios/as. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido en América Latina a una proliferación de los vínculos (explícitos) entre gobiernos y líderes sociales que invitan a repensar este punto de partida. En dicho marco, el objetivo de este artículo es revisar los límites y potencialidades que encierra esta conceptualización para las democracias latinoamericanas.

Con tal fin, en el presente texto revisamos, en primer lugar, los debates clásicos de la teoría política acerca de la relación entre acción colectiva y participación electoral. Luego, el modo en que fue afrontada esta tensión en la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), un movimiento social piquetero (o de trabajadores/as desocupados/as pobres) frente a dos situaciones concretas: la «aceptación» de programas sociales en 1998 y la conformación de un «partido de base» para apoyar al gobierno nacional en 2003. Estos dos momentos señalan, además, el auge y la fragmentación de ese movimiento que llegó a consolidarse en 18 de los 24 estados provinciales argentinos y movilizó a más de 150.000 personas.

A partir de esta conceptualización, nos preguntamos al final del artículo acerca de la pertinencia de sostener las concepciones occidentales acerca de la distinción entre partidos y movimientos en el contexto sociopolítico de las jóvenes democracias latinoamericanas.

Este trabajo forma parte de una investigación comenzada en 2001 sobre de la construcción de vínculos políticos en sectores populares. Tiene continuidad a la fecha gracias al Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). A partir del paradigma interpretativo (MAXWELL 1996), la investigación fue llevada a cabo con metodología cualitativa, habiéndose construido los datos desde registros de observación y análisis documental (JOHNSON, AVENARIUS & WEATHERFORD 2006; WOLFINGER 2002), así

como con relatos de vida (TAYLOR & BOGDAN 1996) y registros de talleres participativos (GUSTAVSEN 2008), sobre la base de cuyo minucioso análisis se reconstruyeron los debates relevados.

1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: MOVIMIENTOS Y PARTIDOS

El concepto de participación política alude a los modos por los cuales las personas se involucran, a través del debate o la acción directa, en asuntos relacionados con lo estatal, lo público o al menos alguna de las dimensiones que ponen en juego los sentidos de justicia socialmente compartidos. En las democracias representativas, las contiendas electorales permiten expresar las preferencias singulares en relación con los asuntos públicos, a través de la elección de legisladores/as y mandatarios/as vinculados/as a partidos políticos (PANEBIANCO 1990, SARTORI 1997). En tal sentido, los partidos constituyen el principal actor colectivo de las democracias modernas, teniendo carácter universal (existen en todas las naciones democráticas) a pesar de la heterogeneidad de sus funciones y estructuras reflejo de las diferentes legislaciones vigentes en los diversos países (LIPJHART 1995). En los regímenes presidencialistas establecidos en América Latina en general, y en Argentina en particular, se ha podido observar que a lo largo de todo el siglo XX se han desdibujado tanto su identificación con sectores sociales delimitados como con principios ideológicos firmes. Ello ha sido interpretado como producto de su desplazamiento desde la sociedad hacia el Estado, desplazamiento que se manifestaría en el hecho de que las acciones partidarias están orientadas (cada vez más) a la conquista del poder político, dejando de lado la representación de intereses concretos. Este proceso habría dado lugar a lo que se conoce como «partidos cartel», los cuales se definen por agrupar débilmente intereses, no solo diversos, si no contradictorios (KATZ & MAIR 1995).

El proceso de heterogeneización de las demandas e identidades sociales también ha sido interpretado como fundamento de la proliferación de «nuevos movimientos sociales» desde fines del pasado siglo XX. Estos actores, definidos tanto por su prescindencia del proceso electoral como por el carácter acotado de su representatividad, habrían emergido a partir del descentramiento del trabajo como espacio de configuración de las relaciones sociales (incluido el conflicto o la protesta) y del Estado nacional como interlocutor y árbitro privilegiado del conflicto social (cfr. OFFE 1988, TOURAINE 1999, entre otros).

Este breve repaso de las conceptualizaciones más significativas de los conceptos de partido y movimiento muestra que estos expresan dos modos diferentes de relacionarse con los asuntos públicos, lo cual se pone de manifiesto desde su denominación. La contraposición entre *partido* y *movimiento* y entre su carácter *político* o *social* parecería delimitar un modo específico de expresión y un ámbito de incumbencia.¹ Mientras a los partidos se les atribuye un alto grado de formalidad y burocratización (CROZIER 1974; PANE-BIANCO 1990), los movimientos son pensados como redes informales, con grados de articulación variable entre grupos no estructurados (MELUCCI 1999, TARROW 1994). Mientras que la connotación de lo político parece remitir a la relación con el gobierno y el Estado, y por lo tanto lo general y lo común (cfr. ABAL MEDINA 2004), el carácter social de los movimientos residiría en que constituirían expresión de minorías o grupos acotados, convocados por demandas puntuales y específicas que se pretenden instalar en el espacio público (cfr. MOUFFE 1999, OFFE 1985).

Esta diferenciación no resulta meramente descriptiva sino que, además, deviene en caracterizaciones normativas que (in)habilitan modos específicos de inserción política. Así, mientras se espera que los partidos puedan construir alianzas entre sí y con los gobiernos (cfr. CROZIER 1974, KATZ & MAIR 1995), se considera que los movimientos son cooptados cuando aceptan participar de la gestión estatal (cfr. TARROW 1994, TEJERINA 1998). Igualmente, se espera que los/as líderes partidarios/as tengan y ejerzan su vocación electoral (cfr. CAVAROZZI 2006, DUVERGER 1981), mas se desconfía de los/as líderes sociales que manifiesten tenerla (cfr. MELUCCI 1999). En tanto los partidos pueden otorgar incentivos para asegurar la participación de sus bases (cfr. PANE-BIANCO 1990, WARE 1996) y se supone una diferencia creciente entre líderes y adherentes (cfr. ABAL MEDINA 2004); se espera que en los movimientos sociales exista una correspondencia exacta entre la condición social del líder y las demandas que expresa (cfr. MELUCCI 1994, PIZZORNO 1989). De hecho, la carencia de recursos *proprios* constituye uno de los aspectos que señalan el carácter vigoroso y genuino del movimiento social (TARROW 1994, ZALD & MC

¹ De hecho, las notas características que en la teoría política contemporánea se atribuyen a los partidos ya se encuentran presentes en la definición weberiana de «partido» que establece como notas distintivas la presencia de una estructura formalizada y jerárquica, por un lado, y la finalidad de «posicionar alguno de sus miembros» en el Estado, por otro (WEBER 2004 [1922]: 228-230).

CARTHY 1987) por lo que la distribución de incentivos para la participación se califica de oportunista (cfr. MELUCCI 1999, PIZZORNO 1989).

Hasta tal punto se consideran estas expresiones como mutuamente indiferentes que el estudio de partidos y movimientos constituye subcampos diferentes de la teoría política y social, los cuales raramente dialogan entre sí. Paradójicamente, esta mutua prescindencia se sustenta en conceptualizaciones similares acerca de la politicidad, que —parafraseando a Gramsci—, dan carácter orgánico a la distinción analítica entre Estado y sociedad.

Esta definición acotada de la politicidad puede rastrearse, en teoría política, en al menos dos tradiciones. La primera de ellas, tributaria del concepto de *civitas* romano, es aquella que entiende por politicidad la organización jurídica de la convivencia entre personas a través del imperio de la ley. En este marco, la politicidad constituye una de las dimensiones de la vida social e implica la constitución del Estado (FAULKS 2000). En esta perspectiva, la racionalidad individual es previa a la constitución de la sociedad y el ordenamiento político un arreglo entre individuos subordinado a la preservación de sus intereses (HONNETH 1997). Entonces, ya no existe el hombre, sino los hombres dotados de libertad, frente a quienes el único modo posible de organizar la convivencia, en cuanto a estabilidad pero también a justicia, es a través de un orden que sea el resultado del mutuo consentimiento (POUSADELA 2000). Este enfoque, en el cual el Estado —sede de lo político— y la sociedad —ámbito regido por el mercado— pertenecen a esferas separadas, es predominante en los estudios acerca de la conformación del sistema representativo y la estructura de partidos (ABAL MEDINA 2004, HONNETH 1997).

La segunda vertiente es tributaria de la tradición kantiana y opone los conceptos necesidad (como esfera de lo social) y libertad (como ámbito de la política). Así, el ámbito de la necesidad se gobierna por el cálculo y la racionalidad, en tanto se orienta a garantizar la subsistencia. En cambio, la esfera política se rige por la reflexión y el diálogo entre personas capaces de comunicarse sus sentimientos, de construir un sentido común, el cual constituye el sustrato del llamado «espacio público». Lo que no queda claro en este planteamiento es a qué orden pertenece esta reflexión, si excluye la racionalidad. Retomando esta pregunta, Arendt (1993) postula el «juicio acerca de lo agradable» como el principio que guía las reflexiones en este campo. De este modo, sería posible

dar cuenta de las propias inclinaciones ante las demás personas, lo cual permitiría identificarse con algunas y/o diferenciarse de otras (MENAZZI 2007). Así, la identidad política podría constituirse desde principios que son subjetivos, aunque generalizables a través del debate en el espacio público. Estos supuestos son predominantes entre los enfoques occidentales acerca de la acción colectiva (CALHOUN 1992, FRASER 2006, TOURAINE 1999).

La caracterización ofrecida por la teoría política occidental ha sido ampliamente retomada por los estudios locales más influyentes acerca de la acción colectiva (AUYERO 2002, FARINETTI 1999, JELIN 1985, MERKLEN 1991, SCHUSTER 1999, SVAMPA & PEREYRA 2003). A partir del trabajo de campo realizado y de la lectura de estos textos, se nota, sin embargo, que esta transposición conceptual presenta algunos problemas en función de pensar la participación política en las democracias latinoamericanas. En estas, a diferencia de lo que ocurre en Europa, los movimientos sociales expresan las demandas de amplias mayorías que no logran sentirse interpeladas por las instituciones de la democracia participativa. En dicho marco cabe preguntarse, entonces, si esta conceptualización —que como veremos también se encuentra vigente en la práctica— encierra límites a las posibilidades concretas de ciertos sectores de ejercer plenamente su ciudadanía política.

Como vimos, lo que distingue a partidos y movimientos tiene que ver con la relación que establecen en la arena política frente al Estado; no obstante, sabemos que en América Latina ha sido el Estado quien ha conformado la identidad colectiva que podemos llamar «nación», a la inversa de lo que ha ocurrido en las naciones occidentales (MEYER 2007). Si no es el mismo Estado y no es la misma nación, entonces debiéramos repensar qué implica sostener esta diferenciación al abordar la cuestión de la participación política en nuestros países latinoamericanos.

Si la cuestión del clientelismo político (GONZÁLEZ ALCANTUD 1997, NUN 2000, SCOTT 1969) ha sido considerado un atributo de las democracias latinoamericanas (AUYERO 2000, O'DONNELL 1996), ¿es posible esperar que la conciencia de los propios derechos sea previa a la movilización? ¿No sería negar el potencial emancipador que puede tener la participación per se, hecho observado en otros procesos históricos precedentes? (JAMES 2010 [1990], MARTUCELLI & SVAMPA 1997). El hecho de que los/as líderes no deban

movilizar incentivos —más que la inclinación libre hacia la demanda que orienta su acción contenciosa— ¿no resulta una paradoja al momento de convocar a sectores sometidos a una profunda instrumentalización de su potestad ciudadana, a un déficit en su autonomía moral? (cfr. NUN 2000).

Por otra parte, en un contexto en el cual se ha postulado que las jóvenes democracias latinoamericanas padecen de la apatía política de amplios sectores, sobre todo los más castigados por las reformas neoliberales, lo cual dio lugar a la configuración de una democracia delegativa (O'DONNELL 1992), ¿tiene sentido seguir pensando que los/as líderes de los movimientos sociales deben permanecer ajenos a la contienda electoral? En ese caso, ¿qué canales institucionales tendrían a su alcance? ¿De qué manera las comunidades que se sienten ignoradas por la política oficial podrían ejercer sus derechos ciudadanos? ¿Deberían esperar a que los partidos quieran/puedan vehiculizarlas? ¿Deberían ellos/as mismos/as conformar un partido político? Estas preguntas que forman parte de un debate urgente para la teoría política latinoamericana atravesaron el proceso de auge y declive de la FTV como movimiento social, y en su desarrollo pueden encontrarse claves teóricas sumamente interesantes, como veremos en lo que sigue.

2. MOVILIZACIÓN POLÍTICA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

El debate acerca de qué tipo de relación deben establecer los movimientos sociales con el poder político se planteó en dos momentos claves del movimiento: en sus comienzos, a fines de 1990, y en pleno auge, en 2004. El primero de estos debates suele evocarse como la cuestión de «la aceptación de los planes»; el segundo, como la «incorporación al kirchnerismo» a través de la conformación de un partido político que pretendía fortalecer el «ala progresista» de un gobierno que por entonces se caracterizaba como «en disputa» frente a la «derecha peronista». En lo que sigue analizaremos el modo en que experimentaron este conflicto los/as líderes de la federación.

2.1 LA CUESTIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LOS PLANES

La Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) se constituyó como una coalición de organizaciones territoriales bajo el liderazgo de un grupo de

activistas que se conformaron como tales en los procesos de «tomas de tierra»² que tuvieron lugar en el partido de La Matanza (provincia de Buenos Aires) en la década de 1980, dando lugar a los asentamientos³ El Tambo, 22 de Enero y 17 de Marzo (MERKLEN 1991). Dichos procesos suelen enmarcarse en un modo de acción directa característico del final de la dictadura y comienzos de la transición democrática (JELIN 1985, MERKLEN 1991). Estos tienen estrecha relación con las acciones promovidas por las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) como expresión de un militanismo «social» que se definió a partir del establecimiento de «ejes concretos de acción local» y de las disposiciones que caracterizan la vida cristiana (GUTIÉRREZ MERINO 1983).

En línea con este enfoque, las tomas involucraban la planificación de un trazado urbano regular, la disposición de modos de organización comunitaria para la toma de decisiones, así como la tramitación colectiva del acceso a los servicios básicos. Con esos fines se conformaban organizaciones comunitarias que, una vez *asentado* el barrio, continuaban funcionando abocadas tanto a «cuestiones de política en general» como a promover «mejoras en las condiciones de vida en los asentamientos», tales como la regularización de la tenencia de los terrenos, el acceso a la educación y salud de los/as tomadores/as, entre otros (CALVO 2002).

A fines de 1990, estas organizaciones cambiaron el «eje» de su demanda de la «vivienda» al «trabajo digno» y volvieron a expresarse en el ámbito público, esta vez no mediante la ocupación de tierras sino de rutas y calles; es decir, «haciendo piquetes por tiempo indeterminado». A cambio de deponer su actitud, comenzaron a exigir el otorgamiento de subsidios al desempleo o «planes», constituyéndose de este modo en importantes animadoras del proceso de movilización «piquetero», sobre todo en la zona metropolitana de Buenos Aires (SVAMPA & PEREYRA 2003).

² La expresión «toma de tierra» alude en este contexto a la ocupación de terrenos baldíos, privados o fiscales, con el fin de construir viviendas para los/as propios/as tomadores/as.

³ Los «asentamientos» constituyen una forma de hábitat popular socialmente próximo, aunque diferente a las «villas de emergencia». Se denominan villas de emergencia a los barrios que se erigen en terrenos fiscales o privados sin respetar reglas de trazado urbano, caracterizados por la condición precaria de las viviendas pero también de las instalaciones —ilegales— que permiten el acceso a servicios como energía eléctrica o agua. Se las llamó «de emergencia» porque hasta 1970 constituían lugares de paso para los/as migrantes que llegaban en busca de trabajo, quienes rápidamente podían establecerse en otros barrios una vez que conseguían un empleo. Desde entonces se han convertido en lugares de residencia permanente para muchas familias. Los asentamientos, en cambio, constituyen un modo diferente de ocupación de tierras configurado en la década de 1980, ya que son planificados con el fin de hacer posible su regularización catastral y su incorporación a la urbanización (MERKLEN 1991).

Los llamados «planes» habían sido implementados originalmente para contener el conflicto desencadenado en torno al aumento del desempleo y la pobreza que azotó a pueblos enteros a partir de la privatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Si bien el diseño y financiamiento de esta política social estaba en manos del gobierno nacional, primero las provincias y luego los municipios fueron los organismos encargados de su implementación local. En muchos casos su instrumentalización fue acompañada también por otros programas que distribuían alimentos envasados («mercadería») o elaborados para su consumo («viandas»), generalmente financiados por el gobierno provincial y nacional. De allí, que las rutas y accesos que se «cortaban» —es decir, en los que se instalaban los piquetes— eran preferentemente caminos nacionales o provinciales para forzar una negociación con los ministerios de la nación.

En este marco, el 18 de julio de 1998 se creó la FTV y la primera cuestión a discutir fue el carácter que adoptaría, dado que la demanda de tierra y vivienda estaba siendo desplazada por la «lucha por el trabajo». En tal sentido, el tema principal fue la discusión en torno a «aceptar» que los «planes» pudieran implementarse como solución a las demandas locales en torno a la pobreza. El debate se resolvió a favor de la «aceptación de los planes» sociales, lo que llevó a una subordinación de hecho de las demandas contenidas en el movimiento, frente a la problemática del desempleo. Ello generó muchos debates en los primeros años, los cuales nos fueron contados de este modo:

Muchos de los compañeros no pudieron resistir el cambio piquetero de la FTV, porque lo que han hecho [...] la han desnaturalizado. Los primeros en irse fueron los indígenas, y no sé qué va a pasar con las organizaciones campesinas, el pequeño y mediano productor quiere regularizar la tenencia de la tierra, quiere semillas [...] el inquilino quiere que no lo desalojen, ¿qué hacemos con un plan social frente a esas necesidades? Esto no es la FTV que pensamos, es otra cosa, pero cuando se impuso el sector matancero se puso todo en la lucha piquetera y se dejó de lado el resto. (DANIEL,⁴ informante clave, ex integrante de la FTV)

Como se puede notar en este testimonio, la puesta en primer plano de la «lucha piquetera» supuso el abandono del proyecto que originalmente animó la fundación de la FTV y se constituyó en una fuente de tensión entre el

⁴ Los nombres atribuidos a nuestros/as entrevistados/as han sido cambiados, conforme al compromiso asumido con ellos/as.

«sector matancero» del movimiento y los demás sectores que lo integraban. La consolidación de esta «conducción» llevó a su vez a que muchos/as dirigentes/as y varias de las organizaciones que conformaban la FTV decidieran abandonar su estructura.

Asimismo, otros grupos abocados a la representación y movilización de los/as trabajadores/as desocupados/as pobres del cono urbano bonaerense también denunciaron que la «aceptación de los planes» significaba «aceptar una herramienta del Banco Mundial, contraria a los intereses de los trabajadores como clase». Por su parte, los/as líderes de la federación justificaban su postura merced a argumentos como el que sigue:

Tener qué ofrecer es necesario [...]. El primer grado de conciencia de los compañeros es su propia necesidad, si podés ofrecerles algo se quedan y desde ahí se puede trabajar en ponerle conciencia al compañero, en lo que es el aspecto político le decimos nosotros [...] pero si no trabajás te podés convertir en funcional al gobierno que les reparte los planes, igual que los punteros, por eso no te podés quedar atrapado en lo reivindicativo. (PATRICIO, dirigente nacional de la FTV.)

De acuerdo con Patricio no se trataba de negar el *peligro* que encerraban los «planes», en cuanto a construir una relación meramente instrumental con «los/as compañeros/as». Si se limitaban a distribuir subsidios y alimentos terminarían por ser agentes de la contención del conflicto, lo cual implicaba volverse «funcional al gobierno». Esta práctica —que se atribuye a los/as líderes locales de los partidos políticos, los/as «punteros/as»— implicaría quedarse en lo «reivindicativo», resolviendo una necesidad inmediata a cambio de una adhesión sin «conciencia», estableciendo una relación meramente instrumental.

La propuesta fue, en cambio, lograr esa primera adhesión para luego «trabajar» en el aspecto «político». Ello implicaba, en la práctica, la convocatoria a participar de un corte de ruta como modo de «acumular puntaje» para poder acceder a un «plan», que se obtenía precisamente en la negociación para «levantar» esos cortes de ruta. A su vez, los/as futuros/as y actuales beneficiarios/as debían participar de «reuniones de formación» y asambleas «plenarias» locales que, junto con la contraprestación laboral, constituían las obligaciones impuestas a los/as adherentes. Según observamos, en este contexto se trabajaron los aspectos políticos, «bajando la línea», es decir, comunicando una perspectiva épica acerca de la participación en el movimiento «más allá del plan»,

dando nociones de historia política argentina y latinoamericana, comunicando y justificando las decisiones que tomaban los/as líderes nacionales y provinciales, así como sometiendo a votación decisiones adoptadas localmente.

La distinción que se hacía en el movimiento entre aspectos «reivindicativos», vinculados a la subsistencia, y «políticos», reenvía a la tradicional perspectiva neokantiana antes mencionada. Sin embargo, la separación analítica entre subsistencia y política no se verifica en las prácticas que regulaban la acción comunitaria de este movimiento. Como Patricio explicó, «tener qué ofrecer» era un primer paso para lograr la adhesión; atender los «aspectos reivindicativos» era apenas un inicio en la construcción de una «conciencia política». No obstante, la construcción de ese vínculo no fue solamente una cuestión moral o ideológica, la vigencia y expansión del movimiento dependía de la puesta en juego de la propia capacidad de movilización para acceder a los recursos con los que atraer nuevos/as adherentes y garantizar la asistencia a los/as ya vinculados/as.

Ello se comprende claramente al considerar el marco de focalización de la política social representada en los «planes». Un atributo central de tal enfoque es que para convertirse en beneficiario/a no alcanza con cumplir los requisitos que definen a la población objeto de un determinado programa, fundamentalmente porque el fin de estos era y es contener el conflicto (ÁLVAREZ 2000). De esta manera, la implementación de los programas en dicho contexto requería que los/as demandantes contaran, antes que nada, con el reconocimiento público de su capacidad de movilizarse. Parafraseando a Vilas (1997), la función de bombero asumida por el Estado requería la creación de focos de incendio. Este objetivo se lograba en la medida en que se manifestara públicamente un conflicto que, además de ser notorio, consiguiera el aval de grupos o personas prestigiosas. Cuando esto ocurría, era más probable que se alcanzara la instancia de negociación, en la que se «acordaban» los recursos que, bajo administración del movimiento, serían asignados a las personas movilizadas.

Los/as líderes, quienes encaraban las negociaciones en nombre de los/as manifestantes, debían acordar un «cupó» —es decir, una cantidad de personas en función de las cuales se calcularían los «planes» o la «mercadería» a entregar a la organización— para lo cual era necesario que acreditaran ser «representativos/as». Ello implicaba no solo que garantizaran que los recursos

llegasen a quienes estaban destinados sino también, y fundamentalmente, que fueran capaces de desactivar el conflicto. En tal sentido, contar con movilizaciones masivas era una condición indispensable para poder acceder a un «buen cupo», de allí que la participación de los/as aspirantes era central para poder acercarlos recursos que el movimiento no controlaba a priori, como puede ser el caso en un partido político o una delegación municipal. Alcanzar esta masividad requería a su vez la posibilidad de expandir geográficamente el movimiento, para lo cual también los planes fueron utilizados como herramienta, tal como muestra el siguiente testimonio:

Esta salida estatal de los planes, genera una oportunidad de expandirnos, de crecer [...] vos calculá después del conflicto del 2000, de 18 días, nosotros ganamos un cupo de 40.000 planes, teníamos dos cosas, los volcábamos todos a Matanza y la declará-bamos zona liberada o los repartíamos para organizarnos en todo el país y optamos por lo segundo. (CLAUDIO, dirigente nacional de la FTV.)

El testimonio de Claudio no deja dudas en este sentido. Luego de un corte de la ruta provincial N.º 3, en La Matanza, que se extendió por 18 días y que fue organizado por líderes locales vinculados a la FTV, junto con otro movimiento piquetero, el sector desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), se acuerda con el gobierno nacional un «cupo» de 40.000 planes. En este marco, los/as líderes de estos agrupamientos deciden «repartirlos» en otros distritos a fin de expandir su modelo de organización en otros territorios en los que «no tuvieran trabajo de base propio». Esperaban incorporar agrupamientos que ya tuvieran capacidad de movilización en los términos antes mencionados, práctica que comenzó en 2000 y se extendió, por lo menos, hasta fines de 2001.

De este modo, la FTV llegó a vincular a más de 150.000 personas y a tener presencia en 18 de las 24 provincias argentinas. Esto llevó a la propagación de esta política focalizada por todo el país, primero bajo exclusiva gestión municipal, luego incorporando a las organizaciones comunitarias que demostraran capacidad de movilización y gestión. De este modo, se configuró «un campo de fuerzas» en torno al «piquete como forma social» en el que «el Estado y las organizaciones de desocupados» dependían «mutuamente formando una configuración social específica» (MANZANO 2005). Así, la estructura organizativa de la Federación se reorganizó en función de gestionar y administrar los «planes». En ese sentido, entre 2000 y 2005 la cotidianidad de las personas vinculadas a la FTV se estructuró tanto en torno a la consecución y sostenimiento de recursos estatales («planes», «mercadería»), su distribución y con-

trol, como al cumplimiento de tareas administrativas requeridas por parte de las oficinas gubernamentales. Las tareas encomendadas en relación con esta cuestión daban cuenta del tipo de vínculo establecido y la jerarquía alcanzada en la organización: los/as líderes, «dirigentes» o «voceros/as», eran quienes se encargaban de las gestiones públicas —frente a funcionarios/as, periodistas, académicos/as, representantes de ONG, etc.— en tanto los/as «referentes» se abocaban a tareas concretas de gestión y «los/as compañeros/as de base» se limitaban a efectuar la «contraprestación» exigida por los programas sociales (CROSS & FREYTES FREY 2009).

La investigación realizada puso de relieve que el sostenimiento de un movimiento social de semejante envergadura fue posible merced al establecimiento de prácticas de integración a las que se aludía en el movimiento como «modelo de centralismo democrático». Dichas prácticas permitían gestionar las tensiones cotidianas entre «el barrio» y la «conducción» y se pueden resumir sucintamente en cinco grandes principios: *i)* Las organizaciones vinculadas a la FTV adoptarían y adaptarían el modelo «comunitario», implementado en el asentamiento El Tambo en el que vivían los principales líderes de la federación; *ii)* Los aspectos «políticos» de la FTV se definían en las «mesas» —que podían ser nacionales, provinciales o distritales— conformadas por dirigentes de las organizaciones comunitarias vinculadas; la presencia de un/a líder comunitario/a en las mesas se «ganaba» tanto en virtud de la «capacidad de movilización» (definida por la cantidad de personas que podía llevar a un corte y tiempo que eran capaces de sostener una medida de fuerza) como de su «capacidad de negociación» (establecida en virtud del acceso que podía tener a las autoridades, los medios de comunicación o personalidades influyentes); *iii)* Si bien existían jerarquías entre las «mesas», cada organización territorial tenía (cierta) autonomía en lo «reivindicativo», es decir, en las pautas de gestión de los recursos asignados, a condición de que acompañara el posicionamiento político adoptado en la mesa nacional o provincial; *iv)* El «encuadre» político local podía establecerse con (relativa) independencia; *v)* La incorporación de «nuevas» organizaciones a la federación se discutía en la mesa nacional y debía ser aceptada por las demás organizaciones territoriales.

Este modelo de «centralismo democrático» funcionó exitosamente hasta 2003, contexto en el que se plantearon fuertes conflictos que llevaron a la fractura y dispersión del movimiento. Uno de los ejes de conflicto fue el vinculado

a la propuesta de conformar un partido político, efectuada por líderes relacionados/as con la mesa nacional, cuyo debate proponemos analizar a continuación.

2.2 LA INCORPORACIÓN AL KIRCHNERISMO

El 21 de junio de 2003, la FTV se sumó al Frente Transversal Nacional y Popular (FTNP) a partir de la conformación del Partido de los Trabajadores Argentinos (PTA) en un acto llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Este frente estuvo integrado por organizaciones sindicales y por otros movimientos piqueteros, como el Movimiento Evita, y se identificaba con un sector del gobierno encabezado por Néstor Kirchner. La presentación de sus objetivos y propósitos se llevó a cabo a partir de un documento denominado *La Hora de los Pueblos*, lo cual daba una pauta de su «concepción ideológica».⁵ La propuesta era construir «la base social del kirchnerismo por fuera del PJ», es decir, al exterior del Partido Justicialista.

La necesidad de crear este frente se justificaba en la existencia de un clivaje ideológico en el justicialismo, entre la «centroizquierda» —representada por el presidente Kirchner— y la «derecha» personificada por los ex presidentes Carlos Menem (14/05/1989-10/12/1999) y Adolfo Rodríguez Saa (23/12/2001 y 31/12/2001). De acuerdo con su interpretación, en el seno del gobierno kirchnerista se estaba «librando una batalla» entre sectores afines al «campo popular» y los intereses «oligárquicos» y «antipopulares» que habían dominado el campo político desde la dictadura militar de 1976. De cómo se definiera ese enfrentamiento dependía el rumbo que tomaría la política oficial, de allí que se hablara de un «gobierno en disputa». En este contexto, su apuesta era «presionar» a partir de la conformación de un «amplio frente» que articulara «las expresiones más vigorosas del campo popular» para que la disputa fuera zanjada «a favor del pueblo». En este marco, el rol de las organizaciones territoriales era el de construir y liderar esa articulación, según otro dirigente nacional de la FTV:

El rol de nosotros hoy es articular la recomposición del campo popular, con otros sectores, la clase media, los profesionales los pequeños y medianos empresarios y

⁵ El nombre del documento recuerda al de la carta que Juan Domingo Perón enviara al presidente Kennedy en el marco del encuentro de la Organización de Estados Americanos, que tuvo lugar en Montevideo-Uruguay, en 1968.

productores, los partidos políticos que así lo entiendan, los sindicatos [...]. Ahora, por dónde pasa la política hoy, por dónde pasan las definiciones hoy, no pasan por los sindicatos, es un sector muy devaluado, muy cuestionado y devaluado en la sociedad y menos por los partidos, pero sí pasa por los barrios. Entonces yo quiero crear poder, yo quiero construir poder, y no lo voy a hacer a través de los sindicatos, porque yo sé que no voy a llegar; pero sí lo puedo hacer a través del barrio, porque sé que voy a llegar; voy a llegar a los sindicatos, voy a llegar a la universidad, voy a llegar a los secundarios, a todo voy a llegar, pero a partir de ahí. (GERMÁN, dirigente nacional de la FTV y dirigente FTV-Córdoba.)

En este testimonio pueden observarse los fundamentos del liderazgo que, desde esta perspectiva, debieron asumir las organizaciones territoriales en dicho proceso. Frente al descrédito de las instituciones tradicionales, como los partidos políticos y los sindicatos, era necesario construir una alternativa «desde el barrio». No obstante, tal «alternativa» no debía contener exclusivamente a las organizaciones territoriales y a la «gente de los barrios», sino que debía articularse con otras expresiones —la militancia secundaria, universitaria, sindical, partidaria— y otros sectores sociales —pequeños/as y medianos/as empresarios/as, profesionales, la «clase media», por ejemplo— con el propósito de constituirse como instancia de recomposición del «campo popular». De hecho, había quienes consideraban que el modelo «comunitario» era la única alternativa válida de cara al futuro, como puede verse en este testimonio:

Hoy la cancha nuestra es muy grande [...]. Yo tengo que discutir a la mañana la leche en el merendero que no llegó o el reparto de los alimentos [...] y hoy a la noche termino el día discutiendo con los diputados bolivianos [vinculados al Movimiento Sin Tierra (MST)] que están de paso, esto no es como el dirigente sindical de 9 a 18, como el diputado que se puede hacer negar, pero esto es el futuro [...]. Va a llegar un momento en la vida, en las historias nuestras, que nadie va a poder representar políticamente si primero no representa socialmente. Pero acá lo que hay que ver son las representaciones sociales y las representaciones políticas. Es una de las grandes deformaciones que hoy tenemos. Yo no creo en la liga de carenciados. Acá no hay poder popular organizado, acumulado, democrático, que respalde el proyecto de cambio, no hay cambio para nadie. (CÁNDIDO, dirigente nacional de la FTV.)

Este testimonio muestra la justificación que se esgrimía acerca de la posibilidad de articular su práctica comunitaria y la creación de un partido político. Según su interpretación, perseverar exclusivamente en la organización de los/as trabajadores/as desocupados/as pobres sin buscar «acumular» un «poder popular organizado y democrático» le quitaba productividad política al movimiento que encabezaba. En cambio, el objetivo que debía perseguirse, a su entender, era «crear una herramienta potente de transformación social» que, de

acuerdo con este dirigente, debía articular «representación política» y «representación social». La «herramienta» para avanzar en ese proyecto era el PTA.

Resulta sumamente interesante observar como Cándido parte de la separación entre ambos tipos de representación, «política» —entendida como participación en la arena electoral— y «social» —concebida como el modelo comunitario—. Mientras que la primera tiene un ámbito más acotado, la segunda cuenta con una «cancha muy grande», pues supone la gestión de los programas sociales pero también la articulación con otras expresiones similares, como los lazos con diputados indigenistas bolivianos de paso por Buenos Aires. En esta amplitud, que otorga a la vez cercanía con los problemas cotidianos y perspectiva de articulación a gran escala reside, según Cándido, la potestad de este modelo de representación para vigorizar el cambio social. Sin embargo, si no alcanza a plasmarse en una articulación social más amplia —como planteaba Germán— se corre el riesgo de caer en una de las «grandes deformaciones», que es la de suponer que representación social y política son mutuamente excluyentes, relegando a los movimientos sociales a constituirse en una «liga de carenciados/as».

Más allá de estos puntos de acuerdo, que se verificaban en la mayor parte de los/as dirigentes nacionales de la FTV, la construcción del PTA fue también fuente de inquietudes en otros/as, como puede verse en el siguiente testimonio:

Hay una decisión tomada de apostar al PTA. Ahora, si vamos a las limitaciones que tenemos desde el punto de vista operativo para hacerlo, la falta de recursos, cuesta. Hay que tener mucha cautela, mucho cuidado con esto. Hay algo siempre latente con esta cuestión ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos un partido fuerte, organizado? ¿Tenemos las conducciones y la estructura de la FTV preparada para resistir este proceso? Porque pasó en algunos lugares, en México [con el FZLN], pasó que todos se fueron a militar en el partido y a ocupar cargos de funcionarios y debilitaron el movimiento social. (MANUEL, dirigente de la FTV Mendoza.)

Manuel se preguntaba acerca de la posibilidad de compatibilizar las prácticas que se consideraban distintivas de la FTV, en tanto movimiento social, con la competencia electoral. En este sentido él, así como la mayor parte de los/as dirigentes nacionales de la Federación, expresaba su «cautela», dadas las inquietudes que les provocaba este cambio. Si la especificidad del espacio que «conducían» se había construido a partir de la diferenciación establecida con partidos políticos y sindicatos, ¿cómo sostenerla al constituirse el PTA?

Asimismo, en tanto se asumía que la propia práctica era la única alternativa posible a la «política partidaria» que consideraban agotada, ¿no era ese el momento adecuado de plantear abiertamente y en todos los terrenos esa postura de reemplazo? Para quienes consideraban que «en el futuro nadie podría representar políticamente sino representaba primero socialmente», la pregunta no era tanto si era necesario dar ese paso, sino si «la estructura» podría «soportarlo».

Otras personas vinculadas a la FTV veían problemática la articulación en el FTNP, aunque por otros motivos. Así puede verse en lo que sigue:

A ver, yo sé que Kirchner no da igual que Menem, lo tengo claro, que nos recibe, nos escucha. Pero el tema este de armarle un partido para él, no va. Nosotros tenemos que demostrar que si hace las cosas bien acompañamos, sino no, pero siempre mirando desde el barrio, de la realidad nuestra, con lucha, siempre con lucha. Si vos te metés a un partido después no le podés pegar a este porque tenés compañeros en tal ministerio, no le podés hacer una marcha al otro porque te votó tal ley, y así se va perdiendo todo, la idea de la lucha [...]. A mí no me parece. (FABIANA, FTV Matanza.)

Para Fabiana, si se perdía «la idea de lucha», se «perdía todo». En este sentido, la creación de un partido político, con el solo fin de dar apoyo electoral al presidente, le parecía un error. Por un lado, porque ello implicaba pasar de un «acompañamiento» (condicionado) a un sostenimiento (irrestringido). Si bien ella «sabía» que «Kirchner no era lo mismo que Menem», consideraba que era necesario plantear una cierta distancia y mantenerse siempre en situación de «lucha». Por otro, porque la lógica de la negociación, que exige la inserción de un partido en el campo político, podía llevar a alterar el orden de las prioridades. Respecto a esta cuestión, ella pensaba que la evaluación de las situaciones debía efectuarse «siempre mirando» desde la realidad del «barrio» y no le parecía adecuado que, frente a una eventual situación de conflicto, este no pudiera expresarse por acuerdos establecidos en otros ámbitos.

Con relación a esta cuestión emerge la importancia de la movilización como un aspecto central en la construcción del vínculo político con «los/as compañeros/as». El asidero de esta preocupación se verificó en la práctica, aunque por motivos diferentes. El gobierno kirchnerista tuvo una estrategia frente al «conflicto piquetero» que fue definido por los/as funcionarios/as gubernamentales entrevistados/as en 2003 como «ni palos, ni planes». Ello implicó el cese de la represión violenta a los cortes de ruta, pero también el congelamiento de las nóminas de beneficiarios/as de los «planes» y el reemplazo de los sub-

sidios por la promoción de emprendimientos productivos orientados por los principios de la economía social. En este contexto, la capacidad de movilización dejó de ser relevante para acceder al financiamiento y en cambio se volvió central contar con las capacidades técnicas para poder formular los proyectos, sostenerlos e implementarlos. Desde el desarrollo de esta política, los movimientos piqueteros de escala nacional han desaparecido como tales (CROSS & FREYTES FREY 2009).

Además de las dificultades que podía plantear la articulación entre las lógicas que rigen a un partido y a un movimiento, existía otra serie de argumentos en contra de la conformación del partido, en este caso relacionados con las tensiones que se generaban en el modelo de «centralismo democrático» que permitía integrar a la federación. Así puede verse en este fragmento:

Nosotros, porque no sabíamos que existía el PTA —nos enteramos por teléfono— [...] ¿Éramos un movimiento y ahora somos un partido? Y ahí el tema es que se empezaron a juntar todos dentro de la misma bolsa —entendés— los compañeros que venimos remando y peleando la camiseta históricamente en la FTV y los que recién llegaban pero que eran necesarios también porque «hay que armar un partido, muchachos [...]»; «hay que sumar», pero en esta suma aparecieron todos los barrios nuevos. Vos los vas a ver en una marcha y traían las banderas de tres cuadras y eran cinco y sin una miserable construcción y nosotros con un trapo roñoso pero con una construcción por atrás [...]. Y así no sé si queremos seguir. (FRANCISCA, dirigente provincial de la FTV.)

Para Francisca existía de hecho una contraposición entre «movimiento social» y «partido político» que se diferenciarían entre sí a partir de las «formas de construcción», lo cual era una postura ampliamente compartida por el grupo de líderes territoriales que no estaban dispuestos a participar del PTA. Para ella, constituirse como movimiento social era dar prioridad a «la construcción», lo cual resultaba contradictorio con la lógica de la expresión electoral. En este sentido, lo importante para las organizaciones territoriales no habría sido si tenían una «bandera de tres cuadras» o «un trapo roñoso». Por eso, a partir de la creación del partido, la federación dejaría de ser un «movimiento». Y es que para este grupo, ser un «movimiento» no remitía exclusivamente a las prácticas de integración ensayadas, sino a una definición respecto a su inserción en el campo político.

Lo notable en este testimonio es que, a pesar de compartir la idea de que movimiento y partido suponen prácticas políticas diferentes, su énfasis en la

idea de «construcción» —como algo que ocurre luego de la vinculación con el movimiento— cuestiona la tesis occidental según la cual la movilización política sobreviene como resultado de la articulación colectiva de demandas o identidades singulares.⁶ La idea de «construcción» supone, en cambio, que es la vinculación con el movimiento —a veces motivada en una necesidad económica— lo que permite dar una perspectiva política a la pobreza que se padece.

Es cierto que la participación electoral de personas vinculadas a la federación no constituía una novedad en sí misma, dado que muchos/as de ellos/as —sobre todo Luis D'Elia, su máximo referente histórico— tenían una amplia trayectoria en este sentido. Pero esta participación se había inscrito dentro del grado de «autonomía» que cada agrupamiento tenía para manejarse en cuestiones que se consideraban ajenas a la dinámica del «movimiento». En cambio la situación que se planteaba en ese contexto era diferente.

Como vimos, el «centralismo democrático» que regía la FTV suponía que las decisiones «políticas» se tomaban en las «mesas», fundamentalmente en la mesa nacional. De allí que el hecho de que determinados/as líderes ocuparan puestos de «conducción» otorgaba —al menos simbólicamente— una posición privilegiada a las organizaciones territoriales que lideraban respecto al conjunto. Esta posición se hacía tolerable en la medida en que existía un criterio compartido acerca de la legitimidad de esa posición, basado en la «capacidad de movilización y negociación». Según la investigación realizada, ello no implicaba ausencia de conflicto pero sí posibilidad de entendimiento.

A partir de la conformación del FTNP este delicado equilibrio se puso en tensión. La estrategia electoral llevó a una necesidad de cartelización (KATZ & MAIR 1995) con otros movimientos piqueteros, pero también con dirigentes partidarios/as y autoridades gubernamentales cercanas al kirchnerismo, que desdibujaron el rol de las mesas de la federación y limitaron la autonomía local de las organizaciones vinculadas. Por un lado, porque se debía marchar codo a codo con otros grupos que no tenían ninguna «construcción», entendida en el sentido que se le daba en la FTV. Por otro, porque muchas veces emergían hechos que marcaban fuertes contradicciones entre los intereses locales de las

⁶ Perspectiva compartida en el enfoque europeo de las identidades (MELUCCI 1999, PIZZORNO 1989) y de la movilización de recursos (TARROW 1994, ZALD & MC CARTHY 1987) y hasta en los enfoques basados en las teorías de reconocimiento (FRASER 2006, HONNETH 1997).

organizaciones y la búsqueda de construir amplias alianzas, requeridas por la inserción electoral. Hemos registrado situaciones bastante tensas que tuvieron lugar en este marco, entre las cuales hemos seleccionado una que consideramos representativa del tipo de conflicto al que hacemos referencia.

Ocurrió en una provincia del norte del país. Cuando se estableció el PTA, un dirigente llamó a uno de los líderes para pedirle que «aflojara la tensión con el gobernador», por ser aliado del presidente Kirchner. Esa misma semana, en un «corte de ruta», personas vinculadas a la delegación norteña de la FTV fueron brutalmente reprimidas, y algunos/as dirigentes recibieron «aprietes» de un grupo al que identificaron como «gente del gobernador». Frente a esto efectuaron la denuncia en sede judicial. Cuando recibieron el pedido de «bajar la tensión» tuvo lugar una fuerte discusión. Pero la mayor «sorpresa» la tuvieron al enterarse que, en nombre de la FTV, se había presentado un pedido de revocar la denuncia, por medio de un abogado cuya vinculación con la «mesa nacional» nunca pudo ser establecida. Luego de este conflicto, esa organización se retiró de la federación y muchas otras lo hicieron por motivos similares.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que ello ocurría. Como vimos, sucedió cuando el «matancerismo» asumió la «conducción» de la recientemente creada FTV. En ambas oportunidades varias organizaciones dejaron la FTV. La diferencia frente a la coyuntura de fines de 1990 fue que esta vez no tuvo lugar una incorporación masiva de «nuevas organizaciones», sino que, por el contrario, tras las que en primer término disolvieron su alianza argumentando su disconformidad con la estrategia electoral, también otras se alejaron, inclusive aquellas que habían apuntalado esta decisión. En tal sentido, consideramos que no puede dejarse de lado el hecho de que la mayor parte de las federaciones «piqueteras» sufrió fracturas en un contexto en el que la movilización dejó de ser parte de la gestión de la política social. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el FTNP no ha ocupado un lugar significativo en el campo político y, a la vez, el Partido Justicialista ha tendido a encuadrarse como base electoral del kirchnerismo y ha resuelto sus contradicciones, generando sellos ad hoc para cada elección, los cuales permiten sostener sus líneas antagónicas sin desmembrar la estructura partidaria.

3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA: REFLEXIONES A PARTIR DE LA EXPERIENCIA FTV/PTA

La distinción entre movimientos sociales y partidos políticos supone el establecimiento de modos específicos de inserción en el campo político. Si un movimiento social se define por su carácter informal y su fuerza contenciosa, entonces la *cooperación* con el Estado (por ejemplo, en la implementación de un programa social) o el ingreso de los/as líderes a la arena electoral, se tiende a pensar en función de la extinción del movimiento como tal. Quizás no para desaparecer, pero sí para convertirse en un actor social diferente: un partido político en el mejor de los casos, un grupo cooptado en el peor.

Esta delimitación no está exenta de una jerarquización explícita en teoría política: los partidos continúan siendo el medio privilegiado de acceso al poder político. Por ello, los ciclos de protesta en los que se expresa la acción colectiva suelen pensarse como síntoma de un déficit en su representatividad, usualmente atribuido a su distanciamiento respecto a *lo social*.

A su vez, el hecho de definir a los movimientos como ajenos respecto a lo electoral señala un límite a la posibilidad de sus líderes de llevar por sí mismos/as sus demandas y reivindicaciones a los ámbitos de toma de decisiones. Estos límites no constituyen una cuestión menor si pensamos que los movimientos sociales suelen portar las demandas de aquellos sectores invisibles para *la política*, que en el caso latinoamericano son, fundamentalmente, los sectores empobrecidos.

En efecto, a diferencia de lo que ocurre en los países occidentales, en las naciones latinoamericanas las demandas portadas por los movimientos sociales remiten en muchos casos a lo que podemos llamar mayorías invisibles, dado que en modo alguno puede pensarse como minorías a los/as indígenas bolivianos/as, los/as trabajadores/as precarios/as o desocupados/as argentinos/as o los/as «sin tierra» brasileños/as —por mencionar los casos más estudiados en los últimos años. En este contexto es que nos hemos preguntado acerca del asidero de adoptar estos enfoques —formulados para comprender las democracias occidentales— en el contexto de las jóvenes democracias latinoamericanas. El análisis realizado nos permite concluir que movimientos y partidos tienen lógicas diferentes y señalan procesos distintos, por lo que sostener una

denominación específica parece conservar su asidero. En cambio, cabe preguntarse acerca de la pertinencia de convertir estas notas descriptivas en prescriptivas, dando carácter normativo a aquello que los distingue.

Nuestra conclusión al respecto es que la posición normativa no hace sino reforzar la imposibilidad de las mayorías invisibles de generar ámbitos que puedan representarlas. Ello no solo debilita su capacidad de ejercer la ciudadanía política sino que hace más frágil al propio sistema democrático y a sus instituciones, que fallan en contener a los sectores más postergados. En tal sentido, consideramos indispensable retomar algunos señalamientos que surgen de esta experiencia como punto de partida para pensar la articulación entre representación social y representación política. Primero, que necesidad y política no pueden pensarse como contrapuestas en el marco de las sociedades más desiguales del planeta. Segundo, que a doscientos años de iniciados los procesos emancipatorios y de constitución de los Estados latinoamericanos, estos tienen aún un importante papel que cumplir en la integración social y en la conformación de identidades colectivas que permitan la plena vigencia del sistema democrático. Tercero, que la movilización constituye un campo para la construcción de ciudadanía, más que una mera expresión de su ejercicio. En tal sentido, al revés de lo que se propone en las teorías occidentales, en nuestras sociedades suele ser la movilización la que permite dar perspectiva política a la experiencia. A su vez, crear «conciencia» no es necesariamente incompatible con la distribución de incentivos que favorezcan el acercamiento de sectores no movilizados. Cuarto, pero no por eso menos importante, la construcción de enfoques y perspectivas propias es una condición indispensable para que las ciencias sociales y políticas latinoamericanas puedan constituirse en herramienta de transformación social, enriqueciendo el debate público acerca del destino que queremos para nuestras sociedades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABAL MEDINA, Juan

2004 *La muerte y la resurrección de la representación política*. Buenos Aires: FCE.

ÁLVAREZ, Sonia

2000 «Políticas de desarrollo social, transformaciones y paradojas». En: HINTZE, Susana (comp.). *Estado y sociedad. Las políticas sociales en los umbrales del siglo XXI*. Buenos Aires: Eudeba.

ARENDT, Hannah

1993 *La condición humana*. Barcelona: Paidós.

AUYERO, Javier

2000 «Cultura política, destitución social y clientelismo político en Buenos Aires». En: SVAMPA, Maristella (ed.). *Desde abajo: La transformación de las identidades sociales*. Buenos Aires: Biblos.

2002 *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

CALHOUN, Craig

1992 *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.

CALVO, Dolores

2002 «Organización política auto-referenciada en sectores populares. El caso de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat». Disponible en: <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2002/mov/calvo.pdf>> (última consulta: 20/5/12).

CAVAROZZI, Marcelo

2006 *Autoritarismo y democracia (1955-2006)*. Buenos Aires: Ariel.

CROSS, Cecilia & Ada FREYTES FREY

2009 «Políticas sociales como límite y como herramienta: Reflexiones a partir de experiencias de gestión de dirigentes y referentes piqueteros/as en el período 2001-2007». *Revista El Príncipe*, 1: 75-98. Buenos Aires.

CROZIER, Michel

1974 *El fenómeno burocrático*. Buenos Aires: Amorrortu.

DUVERGER, Maurice

1981 *Los partidos políticos*. Madrid: FCE.

FARINETTI, Marina

1999 «¿Qué queda del movimiento obrero?». *Revista Trabajo y Sociedad*, 1(1). Santiago del Estero.

FAULKS, Keith

2000 *Citizenship*. Londres / Nueva York: Routledge.

FRASER, Nancy

2006 «La justicia social en la era de la política de la identidad: Redistribución, reconocimiento y participación». En: FRASER, N. & A. HONNETH. *¿Redistribución o reconocimiento?* Barcelona: Morata / Paideia.

GIDDENS, Anthony

1982 [1967] «Hermenéutica y teoría social». En: *Profiles and Critiques in Social Theory*. University of California Press. Disponible en: <<http://es.scribd.com/doc/93571819/Giddens-Anthony-Hermeneutica-y-teoria-social>> (última consulta: 30/10/12).

GONZÁLEZ ALCANTUD, José

1997 *El clientelismo político. Perspectiva socioantropológica*. Barcelona: Anthropos.

GUSTAVSEN, Bjørn

2008 «Action research, practical challenges and the formation of theory». *Action Research*, 6 (4): 421-437. Disponible en: <<http://www.uk.sagepub.com/gillandjohnson/SJO%20Articles%20for%20Online%20Reading/Ch%205%20-%2001%20Gustavsen.pdf>> (última consulta: 30/10/12).

GUTIÉRREZ MERINO, Gustavo

1983 *La fuerza histórica de los pobres*. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones.

HONNETH, Axel

1997 *La lucha por el reconocimiento: Por una gramática moral de los conflictos sociales*. Barcelona: Crítica / Grijalbo Mondadori.

JAMES, Daniel

2010 [1990] *Resistencia e integración: El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, 2.ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

JELIN, Elizabeth

- 1985 «Otros silencios, otras voces. El tiempo de la democratización en la Argentina». En: CALDERÓN, F. (comp.). *Los movimientos sociales ante la crisis*. México D.F.: UNU / CLACSO / IISUNAM.

JOHNSON, Jeffrey; Christine AVENARIUS & Jack WEATHERFORD

- 2006 «The active participant observer. Applying Social Rol analysis to participant observation». *Field Methods*, 18(2): 111-134. Thousand Oaks, CA.

KANT, Inmanuel

- 1991 [1790] *Antropología*. Madrid: Alianza.

KATZ, Richard & Peter MAIR

- 1995 «Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party». *Party Politics*, 1 (1): 5-28. Thousand Oaks, CA.

LIJPHART, Arend

- 1995 *Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos. Un estudio de veintisiete democracias 1945-1990*. Madrid: CEC.

MANZANO, Virginia

- 2005 «Desempleo, “piquetes” y acción estatal en Argentina: Análisis antropológico de la configuración de un campo de relaciones sociales y políticas». En: *CD de la VI Reunión de Antropología del MERCOSUR*, 16-18 de octubre, Montevideo.

MARTUCCELLI, Danilo & Maristella SVAMPA

- 1997 *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires: Losada.

MAXWELL, Joseph

- 1996 *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*. Thousand Oaks / Londres / Nueva Delhi: Sage Publications.

MELUCCI, Alberto

- 1994 «Asumir un compromiso: Identidad y movilización en los movimientos sociales». *Revista Zona Abierta*, 69: 153-180. Madrid.
- 1999 *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México D. F.: El Colegio de México.

MENZAZZI, Luján

2007 «Buenos Aires 1870-1950. La conformación de espacios públicos porteños». Disponible en: <<http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/viewFile/762/664>> (última consulta: 20/3/11).

MERKLEN, Denis

1991 *Asentamientos de La Matanza: La terquedad de lo nuestro*. Buenos Aires: Catálogos.

MEYER, Jean

2007 «Historia, región y nación». En: OIKIÓN, V. (ed.) *Historia, nación y región*, t. I. México D. F.: El Colegio de Michoacán.

MOUFFE, Chantal

1999 *El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.

NUN, José

2000 *Democracia: ¿gobierno del pueblo o de los políticos?* Buenos Aires: FCE.

O'DONNELL, Guillermo

1992 «¿Democracia delegativa?». Cuadernos del CLAEH, 61: 5-20. Montevideo.

1996 «Ilusiones sobre la consolidación». *Nueva Sociedad*, 144: 70-89. Buenos Aires.

OFFE, Claus

1985 *La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas futuras*. Madrid: Alianza.

1988 «Democracia de competencia entre partidos y el Estado de bienestar keynesiano. Factores de estabilidad y desorganización». En: vv. AA. *Partidos políticos y Nuevos Movimientos Sociales*. Madrid: Sistema.

PANEBIANCO, Ángelo

1990 *Modelos de partido*. Madrid: Alianza Universidad.

PIZZORNO, Alessandro

1989 «Algún otro tipo de alteridad: Una crítica a las teorías de la acción racional». En *Revista Sistema*, 88: 27-42. Florencia.

POUSADELA, Inés

- 2000 «El contractualismo hobbesiano (o de cómo para entender del derecho es necesario pensar al revés)». En: BORÓN, A. (comp.). *La filosofía política moderna: de Hobbes a Marx*. Buenos Aires: Editorial Eudeba, pp. 365-379.

SARTORI, Giovanni

- 1997 *Partidos y sistemas de partidos*. Madrid: Alianza Editorial.

SCHUSTER, Federico

- 1999 «Social protest in Argentina today: Is there anything new?». En: MUÑOZ, J. & J. RIBA (eds.). *Treball i Vida en una economia global*. Barcelona: Edicions Libreria Universitaria.

SCOTT, James

- 1969 «Corruption, machine politics, and social change». *American Political Science Review*, 69: 1142-1158. Washington.

SVAMPA, Maristella & Sebastián PEREYRA

- 2003 *Entre la ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

TARROW, Sydney

- 1994 *El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Universidad.

TAYLOR, Steven & Robert BOGDAN

- 1996 *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

TEJERINA, Benjamín

- 1998 «Los movimientos sociales y la acción colectiva. De la producción simbólica al cambio de valores». En: IBARRA, P. & B. TEJERINA (eds.). *Los movimientos sociales*. Madrid: Trotta.

TOURAINE, Alain

- 1999 *¿Cómo salir del liberalismo?* México D. F.: Paidós.

VILAS, Carlos

- 1997 «De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo». *Revista Desarrollo Económico*, 144 (36): 931-952. Buenos Aires.

WARE, Alan

1996 *Political Parties and Party Systems*. Oxford: Oxford.

WEBER, Max

2004^[1922] *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. Buenos Aires: FCE.

WOLFINGER, Nicholas

2002 «On writing fieldnotes: Collection strategies and background expectancies». *Qualitative Research*, 2(1): 85-95. St. Louis, MO.

ZALD, John & Mayer MC CARTHY

1987 *Social Movements in Organizational Society*. New Brunswick: Transaction.

[Sobre la autora]

CECILIA CROSS

Argentina. Licenciada en Ciencia Política, Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Docente universitaria de pregrado y posgrado en varias casas de estudio; autora de numerosos artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Investigadora especializada en métodos cualitativos y acción participativa. Áreas de investigación: construcción del vínculo político, gestión local de programas sociales, trabajo en organizaciones no lucrativas, relaciones de género en el trabajo y la política, acción colectiva.